

15 ejes clave
para el rescate ecológico
de nuestro país



PODEMOS.

15 ejes clave para el rescate ecológico de nuestro país

La crisis global de insostenibilidad ambiental y sus implicaciones sociopolíticas

El modelo de desarrollo capitalista, desde las capacidades tecnológicas disponibles y bajo el imperio del libre mercado que impone la visión neoliberal, está acelerando el agotamiento de recursos, así como el desborde y quiebra de ecosistemas y ciclos de la vida, poniendo en cuestión no solo la sostenibilidad del modelo de progreso, de sociedad y de vida que hemos construido, sino la vigencia de los principios democráticos en el siglo xxi.

En una situación de agotamiento de los recursos y de fuerte demanda de los mismos, el precio de los hidrocarburos sube, provoca que la fractura hidráulica y la extracción de hidrocarburos de los fondos abisales sean rentables, y conlleva riesgos incalculables para la vida en los océanos y las poblaciones. Al mismo tiempo, y con el único objetivo de incrementar los beneficios de las empresas, se impulsa la minería a cielo abierto, algo que literalmente desmonta los territorios y destruye su habitabilidad —para extraer, por ejemplo, 1 gramo de oro por tonelada removida—, y deja enormes balsas de aguas tóxicas debido a su alto contenido en cianuro o arsénico (como las balsas de Aznalcóllar), con un elevado riesgo de contaminación de acuíferos y ríos cientos de años, muchas veces en las cabeceras fluviales.

La sobreexplotación de las mejores tierras, la deforestación y el incremento de la erosión degradan el patrimonio de tierra fértil como base de nuestra soberanía alimentaria y de la vida en islas y continentes, abren espacio a las estrategias de acaparamiento de tierras, a la sobreexplotación de acuíferos y ríos, la desecación de humedales y la contaminación masiva de las aguas dulces, generando una crisis global del agua en el «planeta agua» cuyas primeras víctimas son los 1.000 millones de pobres que no tienen acceso garantizado a aguas potables.

Por otro lado, el planeta experimenta un proceso acelerado de urbanización y de concentración de la población en las áreas litorales que está poniendo en cuestión la capacidad de las ciudades para satisfacer las necesidades básicas de los millones de personas que las habitan, y de gestionar de forma sosteni-

ble sus vertidos e impactos ambientales. De hecho, la ineficiencia en el consumo de energía y la gestión deficiente de los residuos en áreas urbanas constituyen dos de las principales amenazas a la sostenibilidad global del sistema.

En este contexto, la ocupación y degradación de hábitats naturales acelera una crisis de biodiversidad (la sexta gran extinción) que pone en riesgo el funcionamiento de ecosistemas y procesos ecológicos esenciales que brindan gratuitamente valiosos servicios a la sociedad.

El cambio climático perfila escenarios catastróficos como envolvente de esas múltiples fallas de insostenibilidad ambiental, con sus correspondientes y demoledoras consecuencias sociales, especialmente en la poblaciones más pobres y vulnerables.

Hace cincuenta años se desacreditaba el ecologismo, se pensaba en él como en una estrategia alarmista antisistema que pretendía bloquear el desarrollo. Incluso desde la izquierda tradicional y otros entornos populares se despreciaba la agenda ecologista como «cosa de intelectuales urbanitas» que priorizaban sobre los pájaros y no sobre las personas y el progreso social. En suma, de forma perversa, se presentaba la disyuntiva de optar por el desarrollo socioeconómico o por la defensa del medio ambiente. Hoy, aunque no faltan argumentos interesados en esta línea, se acepta de forma general que no habrá desarrollo viable si es insostenible ambientalmente, al tiempo que cada día resulta más evidente la vinculación de la crisis ecológica con la crisis social y democrática, lo que hace emerger el principio de *justicia ambiental* como un reto ético y democrático del siglo xxi.

De hecho, en la actualidad la inmensa mayoría de los conflictos sociales a nivel mundial son socioambientales, y en ellos las comunidades más vulnerables defienden sus ríos, sus bosques, o literalmente sus territorios frente a megaproyectos, desarrollos mineros, políticas de deforestación o de acaparamiento de tierras y otros recursos naturales. En nuestra vieja Europa, y en particular en nuestro país, buena parte de las grandes movilizaciones sociales tienen un creciente componente ambiental: ya sean las luchas contra grandes presas y trasvases, la fractura hidráulica o las nucleares, la defensa de la pesca, de la salud pública frente a la contaminación atmosférica, de aguas y tierras, la demanda de calidad alimentaria, la defensa de espacios naturales, la mejora del medio ambiente urbano e incluso la denuncia del acaparamiento de tierras.

La necesidad de una «agenda democrática sostenible para el rescate ecológico del país»

En el programa de Podemos entró de forma consistente la agenda ecologista a través del Plan de Transición Energética, vinculado al cambio climático. Sin embargo, no es suficiente abrir este frente desde la argumentación de los puestos de trabajo que generará esa transición, como núcleo duro del cambio en el modelo productivo.

Es preciso, ante todo, asumir un diagnóstico de la crisis de insostenibilidad ambiental, en línea con el presentado en el apartado precedente. Pero sobre la base de ese diagnóstico debemos cuestionar, no solo el modelo productivo vigente, en sus diversos frentes (industrial, agropecuario, pesquero, forestal, servicios, urbanístico...), sino el modelo de consumo, e incluso el modelo de vida y de progreso imperantes; porque una *vida buena* para todos y todas necesariamente requiere repartir mejor los recursos y, por tanto, cuestionar el consumismo, especialmente de los que más tenemos.

Si queremos asumir de forma efectiva el principio de sostenibilidad es fundamental entender y asumir que un bosque no puede ser administrado como un simple almacén de madera, ni un río como un simple canal de agua que se pierde en el mar... Transitar de la visión de recurso a una nueva visión ecosistémica es fundamental. Incluso para quienes ponen el centro de gravedad en el valor de los recursos, y aunque solo fuera por simple pragmatismo, si queremos seguir disfrutando de forma sostenible de esos recursos necesitamos asegurar la salud y el buen funcionamiento de esos ecosistemas que los generan y regeneran. En todo caso, más allá del valor mercantil de unos recursos u otros, es preciso subrayar que los ecosistemas generan funciones y valores, en muchas ocasiones intangibles y no valorados por el mercado, pero no por ello menos valiosos e importantes.

Los ecosistemas no entienden de fronteras, y por tanto un modelo de gestión sostenible del territorio y de los ecosistemas que lo vertebran debe basarse en la cooperación social de todas las comunidades que lo habitan, aunque en ese territorio tengan competencias Administraciones diferentes, ya sean municipales, autonómicas, estatales o incluso estados soberanos. Ni la atmosfera ni los ríos ni los ecosistemas forestales —o cualquier otro hábitat— entienden de fronteras.

En este contexto, y con la premisa de un modelo de desarrollo acorde con los retos que nos rodean, desde Podemos planteamos nuestra agenda ambiental y ecológica, ambiciosa y profunda, sobre la base de 15 ejes de trabajo:

- 1. Afrontar con decisión el cambio climático.** No solo adaptar, sino también mitigar y reducir el proceso de cambio climático. España, como país mediterráneo, es uno de los más vulnerables de la UE ante los riesgos inducidos por el cambio climático en curso. Por ello, son necesarias actuaciones urgentes para adaptarnos al cambio climático, pero también para reducir nuestras emisiones, de forma responsable y solidaria, ya que somos el país europeo que más las ha aumentado desde 1990. España firmó el Acuerdo de París en 2015 y en 2017, lo que nos anima a iniciar los debates para promulgar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Al respecto, abogamos por la aprobación de una ley de cambio climático que comprometa una doble estrategia de mitigación y de adaptación, desde una doble dimensión, ambiental y socioeconómica, respetando las competencias en sus diversos niveles —estatal, autonómico y municipal— y fomentando la coordinación y complementación de esfuerzos. Esta ley de cambio climático debería basarse en:

- Compromisos de prioridad similares a los asumidos hoy con el déficit público.
- Elaboración de presupuestos del carbono, a fin de cuantificar las emisiones en todos los sectores para poder precisar objetivos y darles seguimiento.
- Control y seguimiento de los objetivos y medidas acordadas sobre bases de transparencia y participación ciudadana.

Además, la ley debería contemplar:

- Plan de transición energética hacia un modelo 100% renovable.
- Plan de acción para reducir las emisiones del transporte.
- Nueva planificación hidrológica en perspectivas de cambio climático.
- Plan de fiscalidad verde.
- Plan nacional de adaptación a los efectos del cambio climático.

- Plan de reducción de emisiones en el sector agrícola y ganadero.
- Plan estratégico del patrimonio natural y la biodiversidad.
- Plan forestal español.

Algunos de estos puntos serán desarrollados de forma específica en apartados posteriores.

Desde su dimensión socioeconómica, la ley debe incorporar la perspectiva de los derechos sociales, en coherencia con el principio de justicia ambiental, en tanto en cuanto el cambio climático afecta de forma global y local más intensamente a los colectivos más vulnerables, como por ejemplo a los hogares afectados por pobreza energética, a los colectivos migrantes, y muy particularmente al medio rural, en proceso o riesgo de despoblación.

- 2. Modelo de producción. Transición hacia un modelo de producción sostenible basado en los principios de la economía circular.** Afrontar el cambio climático como una de las múltiples fallas de insostenibilidad abiertas exige, como se ha explicado, un cambio de sistema energético y de modelo productivo. Pero el cambio climático no es sino una de las manifestaciones y consecuencias —probablemente la más importante— de la crisis de insostenibilidad producida por el modelo económico sustentado en el patrón «coger-fabricar-consumir-eliminar». Así pues, se hace imprescindible articular un nuevo modelo económico en el que la reutilización de bienes usados y el reciclado de los materiales contenidos en los residuos puedan sustituir a la extracción masiva de recursos naturales, reduciendo así la presión que genera su disponibilidad finita, en unos casos, o el limitado ritmo de regeneración de los bienes renovables que nos ofrece la naturaleza. Efectivamente, la economía circular es un nuevo modelo de desarrollo que vincula los aspectos ambientales con los económicos, asumiendo el objetivo de «cerrar el ciclo de vida» de los materiales. Ello supone, en suma, recuperar el valor de los residuos.

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible ofreció un primer atisbo de cambio del modelo productivo, al recoger el principio del desarrollo sostenible en su artículo 2. Sin embargo, durante seis años hemos podido constatar su insuficiencia, ya que no incorpora herramientas eficaces para avanzar en la coherencia de la sostenibilidad.



Para conseguir esta transformación, entendemos necesario promover, en el marco de la legislación básica del Estado, una Ley de Economía Circular que prevea contabilizar e integrar, en los precios de bienes y servicios, todos los costes e impactos generados, consistentemente monetizables, desde la extracción de los recursos naturales y la elaboración de productos hasta su comercialización y consumo, valorizando igualmente lo que hoy entendemos como residuos. Se trata por tanto de evitar la socialización de costes e impactos ambientales y sociales sobre el conjunto de la sociedad, como si no tuvieran valor, mientras se privatizan los beneficios en manos de quienes controlan las lógicas de mercado imperantes; al tiempo que, por otro lado, se ponen en valor los mal llamados residuos, prolongando la vida de bienes reutilizables y reciclando materiales como materia prima de nuevos productos.

Sin embargo, más allá de sacar a la luz los costes de la degradación ambiental y de la precarización social, es preciso actuar normativamente en la gestión de residuos. En efecto, transitar del modelo económico lineal al circular exige revisar las leyes y normas que rigen la gestión de residuos en España, de manera que la recuperación de materiales susceptibles de volver al circuito económico sea mucho más efectiva y eficiente. Es preciso promover nuevas normas que regulen tanto la generación de posibles residuos como su gestión:

- Debe quedar proscrito el vertido de residuos tóxicos o no biodegradables.
- Los biodegradables no reutilizables ni reciclables deben tratarse reforzando las funciones regeneradoras del medio natural, de forma que se garantice el buen estado ecológico del medio receptor.
- Cuantos materiales puedan recuperarse de los residuos deben reciclarse.
- La reparación y reutilización de bienes debe incluso priorizarse sobre el reciclado de sus materiales constitutivos, de manera que se alargue su vida útil efectiva.

En todo caso, promover un nuevo modelo de economía circular no se decreta, sino que exige una sociedad preparada, por lo que se hace necesario establecer un plan de formación y educación para la economía circular a todos los niveles, al igual que se necesita una revisión legislativa que facilite la participación ciudadana en la recogida y gestión de residuos, y una adecuada formación de personal técnico en las diversas materias y frentes de acción.



La transición al nuevo modelo económico debe alcanzar a todos los sectores productivos: desde la agricultura y la ganadería a la industria, pasando por el sector servicios; el urbanismo, la edificación de viviendas y el diseño de las infraestructuras de transporte y comunicación deben revisarse, buscando cerrar el ciclo de materiales y la integración del uso y gestión de recursos, energía y agua en los ciclos naturales. En este contexto, debe pasar a ser objetivo central la recuperación y conservación del buen estado de los ecosistemas, como de hecho empiezan a demandar leyes europeas como la Directiva Marco de Aguas.

3. Promover la transición energética. Uno de los elementos clave de la transición a la economía circular es sin duda el de la transición energética. Disfrutamos y sufrimos un modelo de desarrollo basado en usar y malgastar energía fósil barata. En ella están basados hoy el comercio, el transporte, la industria y la agricultura intensiva. Más allá de considerar la perspectiva previsible del agotamiento de estos combustibles fósiles y sus consecuencias, hemos de tener en cuenta que suponen la principal fuente de emisiones con efecto invernadero, y que perturban la estabilidad del clima. Un cambio climático cuyas consecuencias sobre los ecosistemas y las sociedades humanas apenas si empezamos a percibir, con un riesgo creciente de catástrofes naturales, procesos migratorios masivos y los correspondientes problemas socioeconómicos y políticos. Por ello, la transición hacia otro modelo energético que permita frenar el cambio climático en curso se perfila como uno de los retos fundamentales y necesarios para la humanidad en el siglo XXI.

Por otro lado, nuestro sistema energético está fuertemente centralizado, ya que se basa en grandes infraestructuras cuyo control difícilmente puede distribuirse; solo el Estado o grandes empresas pueden desarrollarlas. En nuestro país, de hecho, este control está en manos de grandes empresas transnacionales, dotadas de un enorme poder económico y una elevada influencia política, lo que crea un contexto en el que «las puertas giratorias», el tráfico de influencias y la corrupción encuentran un caldo de cultivo excelente. Un contexto donde la ciudadanía cada vez tiene menos poder de decisión sobre una cuestión tan vital y de interés general como la energía. Por ello también necesitamos desarrollar un Plan de Transición Energética sobre la base de un sistema democratizable, descentralizado, modular y distribuido, sobre cuatro grandes principios:

- a. El ahorro y la eficiencia energética.
- b. La descarbonización y desnuclearización.



c. La descentralización y la generación distribuida en redes de la energía.

d. La participación ciudadana

Por otro lado, esta transición conlleva medidas de diverso calado, como la contratación pública 100% renovable, una auditoría de costes en los diversos sistemas productivos, estudios de potencial solar, desarrollo de proyectos de producción, distribución y comercialización a través de fuentes renovables, recuperación y promoción del autoconsumo, etcétera. Dado el cambio que se avecina, y la exigencia de democracia real en este frente, sobre el que gravitan tan poderosos intereses económicos, nada se podrá hacer sin el concurso ni la participación efectiva de la sociedad. Por eso, es fundamental desarrollar una estrategia participativa a la hora de elaborar y promover el Plan de Transición Energética. Desde esta perspectiva, proponemos crear una Mesa de Transición Energética Estatal, con las respectivas mesas de transición energética desde un nivel municipal y autonómico nutriendo a la mesa estatal, en las que deberían estar presentes agentes sociales, ciudadanía, movimientos ciudadanos, empresas, universidades, partidos políticos y técnicos de la administración. Este Plan de Transición Energética debe plasmar su desarrollo normativo en la Ley de Cambio Climático a la que hemos hecho referencia previamente, así como en la modificación de las pertinentes leyes (por ejemplo, las normativas reguladoras de la contratación pública).

4. **Desarrollar una contabilidad y fiscalidad verdes para una economía circular.** La implantación de una contabilidad verde o ecológica permitirá cuantificar los flujos de recursos materiales y de energía, así como los impactos generados o esperables en las diversas actividades económicas. Disponer de esta contabilidad ecológica facilita el establecimiento de objetivos ambientales concretos y precisos desde la coherencia del paradigma de sostenibilidad. Fijados esos objetivos ambientales en el frente o en el espacio que corresponda, se trata de establecer planes de medidas que permitan alcanzar esos objetivos. Entre esas medidas suele ser efectivo prever penalizaciones e incentivos económicos dirigidos a conseguir dichos objetivos; pero también definir normas que regulen las actividades correspondientes. Dicho en otras palabras, la pura lógica de mercado, aun con un buen sistema de incentivos y penalizaciones, no suele garantizar la sostenibilidad, aunque, sin duda, ayuda a conseguirla si desarrollamos un marco normativo y legal adecuado.



También es necesario promover una fiscalidad verde que incentive las buenas prácticas y disuada de las malas, con la vista puesta en los objetivos ambientales de sostenibilidad que se asuman en cada caso, desarrollando el principio de responsabilidad ciudadana, empresarial e institucional. Buenas prácticas de producción, uso y consumo que permitan, no solo mejorar la eficiencia, sino asegurar la sostenibilidad, favoreciendo la transición hacia la economía circular. Es de notar que la presión fiscal medioambiental española supone apenas el 1,6% del PIB, mientras que en la media de la UE representa el 2,4% del PIB. Converger hacia la media europea sería de entrada, cuando menos razonable.

Tanto la asignación de costes socioambientales, antes mencionada, como la asignación de cargas tributarias desde una fiscalidad verde debería fundamentarse, siempre que sea posible, en el principio de «quien contamina, paga». Entendido en el sentido amplio de «quien degrada, paga». Cuando el responsable es identificable y el impacto es consistentemente evaluable en términos monetarios, la aplicación del principio debe ser imperativa. Pero aun cuando los impactos, positivos o negativos, no sean consistentemente evaluables en términos monetarios, la implantación de penalizaciones e incentivos puede ayudarnos a generar disuasión o incentivos eficaces.

Por todo ello, proponemos:

- Revisar los impuestos sobre hidrocarburos/carbón y los beneficios fiscales vigentes.
- Eximir de impuestos a la producción eléctrica renovable de menos de 100 kilovatios.
- Igualar los tipos impositivos sobre gasolina y gasóleo.
- Reformar el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, teniendo en cuenta las características contaminantes de dichos vehículos.
- Estudiar posibles tasas por el uso de determinadas infraestructuras de transporte.
- Estudiar la aplicación de impuestos de congestión en ciudades para incentivar el transporte público.





- Promover una profunda reforma de las políticas vigentes a nivel nacional, europeo e internacional en la regulación de emisiones de CO₂ y gases de efecto invernadero, a fin de corregir las graves perversiones y la ineficacia demostrada del sistema vigente.

5. Transitar a la nueva cultura del agua. El acceso a servicios básicos de agua y saneamiento es un derecho humano y, como tal, los Estados deben garantizarlo. Por otro lado, los ecosistemas acuáticos deben ser gestionados como patrimonios de la biosfera, bajo dominio público (o, en determinados casos, bajo dominio comunitario). De ellos depende la vida en el planeta, la cohesión social y la identidad de comunidades, sociedades y territorios. Por este motivo deben ser gestionados desde la lógica del interés general, tanto de las generaciones actuales como de las futuras, garantizando su sostenibilidad.

Tal y como exige la Directiva Marco de Aguas (DMA), defendemos una gestión ecosistémica, integrada y sostenible de ríos, lagos, humedales y acuíferos a nivel de cuenca, al tiempo que asumimos promover de forma efectiva el objetivo central de dicha directiva: recuperar el buen estado ecológico de las masas de agua, incluidos deltas, estuarios y ecosistemas costeros desde una visión integrada y ecosistémica. Entendemos la necesidad de gestionar de forma sostenible nuestros ecosistemas, teniendo en cuenta tanto los flujos hídricos como los sedimentarios y de nutrientes.

Necesitamos una gestión de aguas que supere los tradicionales y obsoletos modelos «de oferta», basados en la construcción subvencionada de grandes presas y trasvases, promoviendo nuevas estrategias de conservación y gestión de la demanda, en consonancia con la Directiva Marco de Aguas. Nuevas estrategias y modelos de planificación y de gestión transparentes y participativos que superen los clásicos enfoques tecnocráticos, de corte autoritario, burocrático y opaco. En este contexto de transición a la Nueva Cultura del Agua es necesario paralizar los megaproyectos más conflictivos, como los trasvases y la construcción de nuevos embalses, que producen fuertes conflictos sociales y graves impactos ambientales.

El regadío es, sin duda, fundamental para muchas comarcas como factor de consolidación del modelo social y profesional agropecuario vigente. En ese frente hemos hecho ingentes inversiones públicas y asumido tremendos sacrificios sociales, como el sufrido por miles de familias desplazadas por la inunda-

ción de sus pueblos para construir las presas que esos regadíos y otros servicios requieren. Por ello, es de suma importancia hacer un uso eficiente de esas infraestructuras y de esos regadíos, y prestar especial atención y apoyo a la explotación familiar.

Sin embargo, las expectativas creadas y alimentadas desde hace décadas sobre nuevos regadíos resultan hoy, en muchos casos, tan insensatas como insostenibles desde las perspectivas vigentes de cambio climático. La reducción drástica de caudales en los ríos por crecimiento de la evapotranspiración vegetal a mayores temperaturas y por reducción de la pluviometría media esperada se ve agravada por el incremento de la variabilidad pluviométrica, lo que implica eventos extremos de sequía y tormentas más agudos y frecuentes. A menudo, los nuevos regadíos aumentan la producción de productos amparados por la PAC, y rebasan las cuotas de producción, con lo que las multas a los productores se incrementan, al tiempo que se fragiliza la disponibilidad de caudales, especialmente en ciclos de sequía. Por otro lado, una parte significativa de los regadíos existentes tiene un futuro sombrío: en unos casos debido a la mala calidad de los suelos —problemas de drenaje y salinidad—, y en otros a la falta de mercado o a los bajos precios. Esta situación nos obliga a repensar el futuro del regadío y a redimensionar la superficie regable que es viable en cada cuenca. En suma, se trata de asumir el reto de elaborar un Plan de Reconversión del Regadío ante las perspectivas de cambio climático, sobre bases realistas de disponibilidad de caudales, desde el principio de sostenibilidad y aplicando criterios sociales de protección de la explotación familiar agraria.

En el campo de los servicios urbanos de agua y saneamiento, asumimos el reto de promover nuevos modelos de gestión pública participativa. En este sentido, combatimos las diversas estrategias privatizadoras que transforman estos servicios públicos en negocios y a los ciudadanos en clientes, al tiempo que favorecen la corrupción. Las políticas tarifarias deben promover la eficiencia y la responsabilidad en el uso del agua, así como permitir una financiación adecuada de estos servicios, pero sin generar opción alguna de lucro.

Los ecosistemas hídricos y los servicios de agua y saneamiento deben ser administrados con eficiencia, desde nuevos enfoques de gestión pública participativa, garantizando profesionalidad y transparencia en la gestión, así como responsabilidad participativa en los usuarios.

En suma, desde la coherencia de la Nueva Cultura del Agua proponemos:

- Reformar la Ley de Aguas para garantizar una transposición consistente de la directiva marco, asumiendo el objetivo de recuperar y conservar el buen estado ecológico de las masas de agua.
- Modernizar y democratizar las confederaciones hidrográficas y las agencias de aguas, en coherencia con una gestión interdisciplinar, integrada, ecosistémica y participativa del ciclo hídrico y de nuestros ecosistemas acuáticos.
- Promover nuevos modelos de gestión pública, transparente y participativa de los servicios de agua y saneamiento, empoderando a los Ayuntamientos desde la coherencia de un municipalismo democrático y participativo.
- Combatir la corrupción imperante, movida por las ya tradicionales relaciones de opacidad y clientelismo en la Administración, y por los incentivos que genera la mercantilización de los derechos concesionales y la privatización de servicios públicos.

6. Salvar los suelos. Sustento de la vida y del bienestar. El suelo fértil es sustento de vida, alimentación sana y bienestar. El suelo sano y fértil es uno de los hábitats más diversos de la tierra. Contiene una enorme cantidad de organismos esenciales para los ciclos globales que hacen posible la vida en continentes e islas. Sin embargo, ha sido sistemáticamente infravalorado. En las últimas décadas lo hemos empobrecido, explotado, sellado, erosionado y contaminado, y hemos especulado con él hasta límites insospechados. En la actualidad no existe una legislación a nivel europeo que se centre en su protección. Nosotros respaldamos los esfuerzos en curso para conseguir una directiva que proteja la fertilidad de los suelos: por la soberanía y la seguridad alimentaria, por la conservación de la biodiversidad y por la lucha contra el cambio climático.

La gestión sostenible del recurso suelo se vincula a la ordenación del territorio. Proponemos revisar la Ley Estatal del Suelo y las leyes de cada comunidad autónoma para:

- Adecuar su coherencia al principio de sostenibilidad.
- Reforzar la visión integrada del territorio.

- Establecer medidas para gestionar mejor y proteger los bienes comunes y públicos.
- Articular la vinculación de los diferentes planes sectoriales.
- Definir unidades espaciales de planificación, ya sean sectoriales o supramunicipales, así como otros aspectos esenciales de la gestión del suelo.

Desde esta coherencia respaldamos la propuesta de una Ley de Protección de Suelos Fértiles que permita defender las huertas y vegas tradicionales frente a la presión de la especulación urbanística. Esa legislación, que deberá hacerse en sus correspondientes ámbitos competenciales, se vería favorecida si ofrecemos el marco de una Ley General de Protección del Paisaje que armonice la ordenación territorial entre los diversos espacios y usos del suelo.

- 7. Promover una política forestal sostenible que impulse el desarrollo rural.** La gestión forestal sostenible constituye uno de los retos ambientales con más importantes implicaciones en el medio rural. Un reto ambiental de primera magnitud por cuanto de nuestros bosques depende, no solo la conservación de territorios, paisajes y valiosos patrimonios de biodiversidad, sino un eje fundamental en la lucha contra el cambio climático. Por un lado, esa gestión es clave en las *estrategias de mitigación*, al ofrecer un notable sumidero de CO₂. Hoy, de hecho, el crecimiento del stock forestal compensa en España un 20% del total de nuestras emisiones de CO₂. Pero al mismo tiempo constituye una de las claves en la lucha contra la desertización, en el marco de las *estrategias de adaptación* al cambio climático, en la medida en que preserva el suelo, especialmente en laderas que serían fácilmente erosionables, sin la cobertura que el bosque genera. Una cobertura vegetal que facilita la infiltración del agua alimenta los acuíferos que regulan los caudales base de nuestros ríos, y reduce la escorrentía superficial de las tormentas, con lo que se amortiguan las crecidas y los riesgos de inundación, se evitan corrimientos de tierra y se ralentiza el aterramiento de los embalses.

Este reto ambiental exige replantear la política forestal, recuperar especies autóctonas propias de los diversos espacios forestales, en detrimento de especies como el eucalipto, introducidas desde la perspectiva de intereses cortoplacistas de determinados sectores y que no responden a criterios de sostenibilidad ni a la coherencia del interés general.



Obviamente, nuestros bosques más emblemáticos ofrecen espacios de oportunidad al desarrollo turístico en el medio rural, especialmente los parques nacionales y los espacios protegidos. Además, una buena gestión forestal puede revitalizar zonas rurales deprimidas, dar sustento a actividades económicas y generar recursos diversos, y ofrecer una notable fuente de empleo, tanto en la regeneración de masas forestales degradadas como en la prevención de los crecientes riesgos de incendio que el cambio climático produce. El hecho de que hoy se gaste diez veces más en extinción de incendios que en la prevención de los mismos nos ofrece un buen indicador sobre el tipo de políticas forestales, o, mejor dicho, de la ausencia de verdaderas políticas forestales que padecemos. Para colmo, a la degradación forestal que ha supuesto la introducción masiva de especies de crecimiento rápido, que empobrecen los suelos y fragilizan nuestros bosques, se ha unido en los últimos tiempos la transformación del servicio de prevención y extinción de incendios en un puro negocio, lo que ha generado tramas oscuras, ajenas al interés general que debe presidir la política forestal.

En este contexto es fundamental poner en marcha una serie de iniciativas:

- Un plan de activación socioeconómico del sector forestal.
- Un programa de promoción de los productos forestales.
- Un plan de restauración hidrológica forestal.
- Proyectos de regeneración de especies y de sanidad forestal para mantener en buen estado las masas forestales.
- Reactivar y revitalizar el uso y aprovechamiento de los montes comunales, reformar la Ley de Montes para recuperar un régimen protector que prohíba recalificar y construir en terrenos quemados, y para concebir los recursos forestales como elementos esenciales del patrimonio natural de nuestro país y de la lucha contra el cambio climático.

8. Rescatar nuestro patrimonio natural y preservar la biodiversidad. La biodiversidad es, ni más ni menos, que el patrimonio de vida del planeta. En nuestro país, el 90% de esa biodiversidad se encuentra en el medio rural de interior o zonas costeras. El 27% del territorio estatal goza de una figura de protección de la Red Natura 2000. Este patrimonio natural es patrimonio



común de toda la sociedad, y por tanto es nuestro deber conservarlo, protegerlo y promocionarlo de acuerdo con los compromisos internacionales que España tiene firmados. Pero, más allá de cumplir esa obligación, debemos ponerlo en valor como base de estrategias de desarrollo sostenible en el medio rural.

Una adecuada política de conservación del patrimonio natural ha de ir unida a una política agroganadera que reconozca la importancia de los sistemas tradicionales campesinos, mucho menos agresivos con la naturaleza que la actual agroindustria. Desde esta perspectiva, defendemos un modelo de producción agropecuaria y pesquero sostenible y social basado en unidades productivas familiares y coherentes con esta política de conservación del patrimonio natural. Además de conservar las especies silvestres, queremos conservar y proteger el importante patrimonio agrícola y ganadero que conforman los recursos genéticos tradicionales, como pueden ser las diferentes variedades de plantas y razas ganaderas autóctonas.

Es necesario arbitrar y desarrollar políticas y estrategias de diálogo y compromiso entre los diversos actores y sectores. En esta línea, valoramos positivamente el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2011-2017 como elemento clave en el desarrollo de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Nos comprometemos a dar apoyo para que se active este instrumento, novedoso en la legislación española, a favor de las metas y acciones previstas para promover la conservación, el uso sostenible y la restauración del patrimonio natural y la biodiversidad.

- 9. Un modelo territorial compartido.** Con el objetivo de sustituir la competencia por la cooperación territorial, además de un gran acuerdo básico sobre el modelo de organización del Estado un proyecto de país requiere un modelo territorial compartido que resuelva los desequilibrios entre los distintos territorios que lo componen y sustituya las políticas sectoriales incoherentes por una visión integrada. La defensa de la cohesión territorial y la solidaridad entre los pueblos de España también es una forma de patriotismo. Solo un enfoque de conjunto puede evitar los conflictos y tensiones entre comunidades autónomas, las contradicciones e incompatibilidades de las políticas sectoriales y —sustituyendo la competición por la cooperación territorial— aprovechar las sinergias de las estrechas vinculaciones entre los diversos subsistemas para diseñar una red de infraestructuras vertebrales de comunicación, optimizar la gestión del agua, racionalizar la generación y transporte de energía o articular una

mallas peninsulares de espacios naturales protegidos y de grandes corredores ambientales. Solo con un enfoque global podemos abordar con posibilidades de éxito los retos a los que nos enfrentamos, como los graves desequilibrios económicos y sociales, la crisis demográfica o la revitalización del espacio rural.

10. Urbanismo participativo, democratizando y humanizando nuestro entorno urbano. Las áreas urbanizadas —en las que vive el 80% de la población española— son económicamente ineficientes, ambientalmente insostenibles y socialmente injustas. Es preciso pensar, diseñar y promover un nuevo modelo de ciudad que permita garantizar la cohesión social y la convivencia desde perspectivas de sostenibilidad. Para ello, hay que desarrollar claves como las siguientes:

- Asumir la complejidad del espacio urbano, donde los usos residenciales del suelo deben convivir armónicamente con actividades productivas, comerciales, de ocio... Con ello, los barrios se convierten en espacios cercanos de convivencia; se reducen los tiempos y distancias en desplazamientos cotidianos por trabajo, estudios o compras, y se habilita una movilidad alternativa al vehículo privado, basada en ir a pie, utilizar la bicicleta y el transporte público de calidad.
- Promover la compacidad para evitar así la expansión desordenada, ya que esta consume suelo y recursos naturales, desvertebra la convivencia vecinal, fracciona y degrada ecosistemas, banaliza paisajes y externaliza costes ambientales, al tiempo que genera una creciente huella territorial tan insostenible como injusta. Esa compacidad exige promover infraestructuras y servicios de transporte público accesibles a todos como alternativa al automóvil privado; y lo exige para conseguir, aun con esa densificación urbana, un aire respirable, minimizando emisiones contaminantes, usando energía eléctrica (con fuentes renovables) e hidrógeno.
- Favorecer la cohesión social y territorial, garantizando, junto a derechos de carácter social, como el derecho a la vivienda, equipamientos o transportes accesibles y de calidad, otros vinculados al medioambiente urbano, de los que dependen la salud pública y el bienestar vecinal: como el derecho a un aire sano, a aguas de calidad y servicios de saneamiento que garanticen la salud de nuestros ríos, o el derecho a espacios públicos de ocio en plazas, parques

y espacios fluviales urbanos. Derechos socioambientales que deben combinarse con los correspondientes deberes y responsabilidades territoriales hacia el entorno rural y los ecosistemas de los que depende la vida urbana. Uno de los vectores de esa integración territorial puede y debe ser el de la alimentación; se facilitaría el privilegio de consumir productos de la huerta y de las vegas de cercanía sin producir emisiones por transporte, generaría trabajo y favorecería la preservación y el uso de esos suelos fértiles. El mismo juego de derechos y deberes se produce en el servicio de agua y saneamiento respecto a los ríos que, por una parte nos abastecen de aguas de calidad, y por otro nos exigen sanear los retornos, preservando el buen estado de sus caudales y riberas.

- Impulsar la participación, de manera que los vecinos y las vecinas pasen de ser sujetos pasivos a tomar parte en las decisiones que dan forma a su entorno cotidiano, y para que configuren el modelo de ciudad en el que quieren vivir. Transparencia y participación como mejores antídotos contra la corrupción, y garantías de la prevalencia del interés común sobre los intereses especulativos particulares.

Para construir otro modelo de ciudad es necesario el impulso y desarrollo de la conectividad ecológica. Con la introducción de cambios en las diferentes normativas sectoriales queremos mejorar la conectividad ecológica entre las zonas naturales existentes. Quedaría garantizada la reducción de la fragmentación y aumentaría la coherencia ecológica, que protege, a su vez, la biodiversidad. Impulsaremos la conectividad ecológica como herramienta de inclusión de la biodiversidad en todos los ámbitos políticos, centrándonos en el de la ordenación del territorio y las infraestructuras energéticas y de transporte.

- 11. Prioridades para un transporte y una movilidad sostenible.** El transporte es el responsable de aproximadamente el 40% de la energía final consumida en España, y genera un porcentaje análogo en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que actualmente produce el país. En las últimas décadas, los cambios en el estilo de vida y en el modelo urbano y territorial han ido generando grandes problemas de movilidad. Problemas no solo de congestión en el tráfico, sino también de contaminación e insalubridad del aire que respiramos, al margen de los impactos sociales (guetos urbanos, por ejemplo) que produce el transporte, sobre todo el motorizado, con fuerte repercusión en la calidad de vida de las personas. Para entender los



problemas de la movilidad es fundamental ampliar el ámbito de acción y reflexión, y vincular transporte a modelo de desarrollo urbanístico y de ordenación territorial. Toda actuación que pretenda favorecer una movilidad sostenible, especialmente en grandes urbes, pasa por reducir el uso del automóvil privado y por fomentar el transporte público y el no motorizado. La cultura que nos lleva al uso abusivo del automóvil es también responsable del mal funcionamiento del transporte público y de la inhibición en el uso de los no motorizados. Por eso no se puede hablar de fomento del transporte público o no motorizado sin hablar de reducción del número de coches. Es preciso facilitar la accesibilidad de los ciclistas al transporte público —autobús, tranvía, cercanías o metro— en todas las áreas urbanas y metropolitanas. Es preciso diseñar y promover alternativas financieras a las actuales concesiones de transporte público que permitan recuperar el control público y ciudadano efectivo de este servicio básico. De entrada, es preciso auditar los contratos vigentes, de forma que se analicen abusos e incumplimientos, de cara a posibilitar procedimientos de renegociación o reversión de esos contratos, con el fin de recuperar un control público efectivo y participativo que asegure la calidad, la accesibilidad universal y la seguridad de servicios que son esenciales. Impulsar transportes eléctricos o el uso de combustibles como el hidrógeno permiten reducir la contaminación en áreas urbanas densas, aunque el objetivo debe ser cerrar el ciclo de sostenibilidad con el uso de energías estrictamente renovables.

Es urgente abordar el transporte de mercancías. Del total de emisiones que genera el transporte en el ámbito nacional, el 90% proceden de la carretera, mientras que las aportaciones de los modos aéreo, marítimo y ferroviario representan el 5%, 4% y 0,3%, respectivamente. El transporte por carretera es el modo utilizado por un 84% de las mercancías, seguido del marítimo, con un 13%, mientras que el ferrocarril no alcanza el 3%. Esta composición varía sensiblemente si se analizan solo los tráficos con nuestro mayor socio comercial, la UE. En este caso, el tráfico marítimo es el más importante, con una cuota del 54%, seguido del carretero, con el 44%, mientras que el ferroviario no alcanza el 2%. En el caso de los puertos españoles, el 38% de las mercancías embarcadas o desembarcadas lo hicieron por carretera, mientras que las que lo hicieron por ferrocarril no alcanzaron el 3%. En consecuencia, y teniendo en cuenta que el transporte por carretera conlleva unos costes sociales y medioambientales mucho mayores que el ferrocarril y marítimo, es imprescindible fomentar un reparto intermodal distinto, potenciando el transporte de mercancías por ferrocarril, me-



mejorando el acceso ferroviario a los puertos, impulsando la intermodalidad ferroportuaria y el transporte marítimo de corta distancia (TMCD) como alternativa o complemento sostenible al transporte por carretera en la media y larga distancia e implantando de forma obligatoria códigos de buenas prácticas medioambientales para la prestación de los servicios del transporte, entre otras medidas.

12. Sostenibilidad de nuestros ecosistemas marinos. España es el segundo país de la Unión Europea con mayor número de Kilómetros de costa, y el primero en términos de biodiversidad marina. Nuestras aguas jurisdiccionales ocupan algo más de un millón de Km², una superficie que dobla la extensión de nuestro territorio emergido, con una enorme riqueza de hábitats (más de 10.300 especies, 4,6% del total de especies conocidas por el hombre). Pero esta gran riqueza no escapa a las amenazas que se ciernen sobre la biodiversidad terrestre. A los más tradicionales problemas de los ecosistemas marinos (como la contaminación o la sobrepesca) se han sumado en las últimas décadas otros nuevos como las basuras marinas, el cambio climático, el ruido submarino o la acidificación de los océanos, por citar solo algunos de los ejemplos más preocupantes.

Con objeto de proteger esta gran riqueza natural, es necesario profundizar en la gestión ecosistémica del medio marino mediante el desarrollo íntegro y decidido de las directivas europeas de gestión del medio marino, como la Directiva de Estrategias Marinas (DMEM, 2008/56/UE), la Directiva Marco del Agua (DMA, 2000/60/UE) o la Directiva Hábitats (92/43/UE). Para lograrlo, es imprescindible reorientar la política pesquera común, apoyando los métodos de pesca más respetuosos frente a las artes de mayor impacto. Es necesario ampliar nuestra red de espacios marinos protegidos, haciéndola lo suficientemente amplia como para garantizar la viabilidad y conectividad de los hábitats y especies presentes en nuestros ecosistemas.

Desde Podemos creemos que el impulso hacia la economía azul en nuestro país debe partir desde una correcta planificación estratégica marina que permita el encaje de las distintas actividades económicas en el medio marino, pero poniendo siempre por delante las capacidades finitas de nuestras aguas. En este sentido, la Directiva Marco Europea para la Ordenación del Espacio Marítimo (DMOEM, 2014/89/UE) puede ser una oportunidad para avanzar en una planificación que prime la sostenibilidad sobre el beneficio económico. Debemos abandonar modelos caducos de desarrollo basados en la extrac-

ción casi desesperada de bolsas de hidrocarburos situadas en aguas profundas y apostar de manera decidida por las energías renovables marinas (eólica con ventajas fiscales, mareomotriz, undimotriz). En definitiva, es necesario modernizar nuestra forma de gestionar el medio marino —incluyendo su protección de manera transversal en el conjunto de las políticas nacionales—, con el fin último de proteger su biodiversidad y garantizar que las generaciones futuras puedan disfrutar un medio marino sano y lleno de vida.

13. Plan de protección efectiva del litoral y las costas. Entendemos necesario modificar la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral, y modificaremos la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para introducir medidas de protección reales y efectivas de la costa virgen (no urbanizada). También favoreceremos su aplicación y desarrollo, para lo que mantendremos la potestad del Estado de suspender actos y acuerdos de entes locales que afecten al dominio público marítimo-terrestre. Con ello pretendemos frenar la destrucción (por la especulación urbanística) del litoral virgen, y aumentar la declaración de áreas protegidas en el litoral. Realizaremos un inventario de los municipios que desarrollen mejores prácticas en este sentido, con el fin de publicitarlos y reconocer su valor y su apuesta por la sostenibilidad, de modo que sirvan de ejemplo para los demás. Desarrollaremos un Plan de Restauración Ecológica del Litoral, Áreas Húmedas, Marismas, Playas y Áreas Degradadas.

Construiremos nuevas depuradoras y mejoraremos las existentes con el propósito de reducir los vertidos sobre el litoral y mejorar su calidad. También realizaremos inventarios de los vertidos, intensificaremos la vigilancia sobre los vertidos de los buques y llevaremos a cabo mejores protocolos para reducir la probabilidad de que estos se produzcan, especialmente en las áreas del litoral español donde el tráfico marino es más elevado.

Por último, elaboraremos un inventario de los municipios que desarrollen mejores prácticas sobre el litoral y le daremos publicidad, lo que permitirá reconocer su valor y, además, servirá de ejemplo para los demás.

14. Derechos de los animales. Nuestro deseo de un país mejor conlleva también un mejor trato a los animales. Una buena parte de la sociedad viene reivindicando mejoras en este terreno con sus demandas y movilizaciones. Es un hecho que muchos ciudadanos buscan en Podemos respuestas a estos requeri-



mientos para proteger a los animales frente al maltrato. Por ello, entendemos que nuestro partido debe defender, de forma ordinaria, unas bases en relación con la protección animal. Nuestras propuestas proteccionistas no son ni drásticas ni radicales, en aras de conseguir avances rápidos y positivos, pues tenemos precedentes de políticas de bienestar animal desarrolladas en los municipios con candidaturas de unidad popular. Son propuestas básicas y necesarias, dado que el actual contenido programático de Podemos debe adecuarse, en esta materia, al sentir mayoritario de la ciudadanía española.

15. Desarrollar e impulsar estrategias y tecnologías para un futuro sostenible.

Promover la economía circular exige priorizar determinadas líneas de investigación y desarrollar tecnologías, estrategias y formas de producción, de consumo y de vida, en suma, democratizables, que se integren armónicamente en los ciclos naturales de generación y regeneración de recursos renovables como el agua y los alimentos; que permitan administrar los *stocks* naturales de recursos no renovables en el marco de estrategias de reutilización y reciclado; y que respeten la sostenibilidad de los ciclos vitales y de la biodiversidad de nuestro entorno. Pero, como ya se ha dicho, esos nuevos modelos de economía circular difícilmente podrán impulsarse si no es desde principios democráticos y equitativos a la hora de acceder y disfrutar de esos recursos que, tarde o temprano, haremos «escasos». Ello implica favorecer relaciones de cercanía, en las que se pueda desarrollar una participación ciudadana efectiva, priorizando tecnologías modulares, descentralizables e integrables.

Por otro lado, como ya se ha explicado, cuestionamos el sistema centralizado y oligopólico de producción y distribución energética en favor de tecnologías renovables, modulares y descentralizadas —como la energía solar, en sus diversas opciones, y la eólica—, tecnologías que pueden y deben integrarse en grandes redes. La complementación tecnológica debe permitir aprovechar la energía eólica nocturna en horas de demanda baja, haciendo reversibles las centrales hidroeléctricas, para almacenar la energía eólica nocturna como energía hidroeléctrica, mediante bombeos, y desarrollando un parque móvil eléctrico que cargue baterías por la noche.

Como ya se ha dicho, es adecuado favorecer el abastecimiento de alimentos de cercanía, integrando el entorno agrario en las políticas urbanas, a través del vector alimentación.

La ordenación urbana debe reducir las necesidades de movilidad cotidiana, descentralizando, por ejemplo, los centros comerciales, hospitalarios y de ocio en el tejido urbano compacto, en lugar de concentrarlos fuera de la ciudad. Y, en todo caso, como se ha explicado, debe priorizarse la movilidad peatonal, en bici y en transporte público, frente a la opción de grandes infraestructuras y crecientes espacios para el coche, que desemboca en una movilidad cada vez más torpe, cara e insalubre; al igual que debe favorecerse el transporte ferroviario frente al transporte por carretera.

Es necesario permeabilizar el espacio urbano para afrontar los graves problemas derivados del binomio saneamiento-drenaje urbano, incentivando la participación ciudadana mediante estrategias y tecnologías descentralizadas como la recogida de pluviales para su uso o infiltración al acuífero, al tiempo que se desarrollan sistemas de drenaje separativo, en vez de hacer «ciudades *gruyère*» a base de megatanques de tormenta, tan caros como ineficientes.